

ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA EN UN CONTEXTO MUNDIAL

Eduardo Luis Junquera Cubiles

Escritor de divulgación científica, novela y ensayo

RESUMEN

El presente artículo analizar el crecimiento actual en los países emergentes cuyo brillo contrasta con las carencias -principalmente en el sector público- a las que se enfrenta su población. En estas naciones se hace necesaria la formación de una conciencia -que sí existe en occidente- acerca de la importancia de disfrutar de unos servicios que provengan del Estado. La falta de transparencia se convierte en el origen de una gestión corrupta y deficiente no sólo en estos países, sino en los del llamado primer mundo. El texto aborda, además, problemas como la importancia de la educación -en el sentido humanista- a nivel mundial, y la necesidad urgente de extremar los controles sobre empresas y corporaciones que influyen en nuestras vidas de un modo decisivo.

1. EL CONTEXTO ACTUAL DE CAMBIO SOCIOECONÓMICO

Durante los años inmediatamente anteriores a la crisis que a día de hoy aún afecta a Estados Unidos y a la mayoría de los países de la Unión Europea, la población mundial que tiene acceso frecuente a los medios de comunicación se acostumbró a escuchar de continuo el término “emergente” dedicado a los nuevos países que de un modo imparable adquirirían un protagonismo ascendente e inesperado en la economía mundial.

La creciente pujanza a nivel internacional de las naciones llamadas emergentes posee un efecto llamativo que de cara a cualquier observador puede eclipsar la verdadera realidad de estos países. Es absolutamente lógico y normal que un país como India con 1.150 millones de habitantes tenga un producto interior bruto mayor que el de otros Estados con menor población como Luxemburgo o Dinamarca, pero pasarán décadas hasta que los indios disfruten del mismo nivel de vida de luxemburgueses o daneses.

Otro tanto podemos decir en el caso de China. La economía del país asiático tenía el mismo tamaño que la española hasta el año 2001, con la diferencia sustancial de que la población de España era entonces de 41 millones de habitantes mientras que China contaba ya con 1.300, es decir, un ciudadano español ganaba de media lo que 32 ciudadanos chinos. En el caso de Brasil -un país permanentemente acostumbrado a ser una referencia mundial de desigualdad y pobreza- el Gobierno considera un motivo de orgullo el hecho de escalar posiciones como potencia a nivel internacional. En el año 2007 Brasil superó a España como octava economía mundial, en 2009 sobrepasó a Italia y en 2011 al Reino Unido. Por poco que la economía del gigante sudamericano crezca en 2012, logrará desplazar a Francia como quinta potencia mundial, y con una población de más de 200 millones de habitantes que ven cómo cada año aumenta su nivel salarial y, por tanto, su nivel de consumo, en pocos años alcanzará el tamaño de economías tan tecnificadas e industrializadas como Japón o Alemania. Desde su importancia en el contexto mundial, vamos a hacer seguidamente una referencia más detallada al caso de Brasil.

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN UN PAÍS EMERGENTE: EL CASO DE BRASIL

Esta prevalencia de la macroeconomía sobre la economía doméstica oculta la verdadera realidad de Brasil: la cuarta parte de la población vive aún bajo el umbral de la pobreza, los salarios son bajos e incluso habiendo aumentado de forma notoria durante los últimos diez años no lo han hecho al ritmo en que han subido los precios: la inflación ronda el 8% anual; la red de transportes de cada ciudad es claramente insuficiente, precaria y anticuada; el sistema público de salud no cubre las necesidades básicas de la población; las pensiones y la prestación por desempleo -ambas irrisorias- son otras de las asignaturas pendientes que ninguno de los gobiernos brasileños han querido solucionar. El 60% de la población brasileña que vive en las grandes ciudades lo hace en los suburbios de las mismas.

El concepto de periferia adquiere un sentido en Europa y otro muy diferente en Brasil. Normalmente, cuando hablamos de periferia en nuestro continente nos referimos a barrios que poseen, al haber sido construidos posteriormente y, por tanto, con los más vanguardistas planes de urbanismo, unos equipamientos en ocasiones muy superiores a los de los barrios nobles situados en el centro de las grandes ciudades. En la periferia no existe el acuciante problema del espacio y la carestía del suelo, lo que da lugar a la construcción de parques y amplias zonas verdes. Los más grandes y modernos centros comerciales se encuentran en la periferia de los grandes núcleos urbanos. Por parte del Estado es fácil dotar a estas áreas de los mejores y más modernos sistemas de transporte -autobús, metro, trenes de cercanías- y la mayor abundancia de terreno hace más viable la construcción en estos barrios de los mayores y más completos hospitales que cubran las necesidades de la población. También los colegios públicos de estas áreas están mejor equipados que los del centro y poseen, en general, mejores instalaciones, especialmente las dedicadas al ocio y al deporte.

La sola mención de la palabra periferia adquiere para el brasileño medio un carácter sórdido y marginal. Estos barrios sufren gravísimos problemas de delincuencia, exclusión social y desempleo. El tráfico y consumo de drogas es otra lacra que afecta a estas áreas. Los problemas sociales no son la única causa de degradación de los suburbios brasileños, a todos estos factores hay que añadir el abandono al que son sometidos por parte de poderes y autoridades; los servicios de limpieza y recogida de residuos son deficientes; no se acometen las obras de reparación y mantenimiento de calles y avenidas, y las instalaciones públicas dedicadas a cultura, deporte, zonas infantiles y salud brillan por su ausencia o están en un estado lamentable. En estos barrios se produce, además, otro fenómeno: a los problemas ya citados hay que añadir que el elevado índice de inseguridad aleja de estos lugares a la gran mayoría de empresas de servicios tan cotidianos como necesarios para el ciudadano: bancos y cajas, grandes supermercados, centros comerciales, cines, etc. No será difícil deducir, por tanto, que la extensión de la clase media es uno de los factores que definen la verdadera modernidad de un país y no, simplemente, el tamaño de su economía a escala mundial.

Un marco jurídico-social moderno que regule las relaciones entre los ciudadanos y la relación de éstos con la administración pública es otra de las características de un Estado verdaderamente moderno. Resulta inevitable entonces hablar del concepto de transparencia. La ausencia casi total de la misma provoca que un país como Brasil pierda cada año 30.000 millones de euros provenientes del Estado en asuntos relacionados con la corrupción. Estas astronómicas cifras pasan del erario público a manos privadas y no se invierten, claro está, en los servicios que son más necesarios para el país: transportes, sanidad, educación, etc. Hay dos casos que representan a la perfección esta ausencia de transparencia en la gestión de los impuestos y recursos: la construcción de la red de metro en las ciudades de Salvador de Bahía y Fortaleza. En ambos casos los sistemas de metro se diseñaron para ser construidos entre los años 1998 y 2002 para su posterior inauguración en 2003. Es imposible justificar un retraso de nueve años en una obra pública y la única explicación razonable es la desaparición -denunciada por los medios de comunicación- de dinero público en comisiones y corruptelas de todo

tipo debido a la falta de controles y de transparencia. Algunos diarios estadounidenses citan la obra del metro de Salvador de Bahía como la más cara y atrasada del mundo.

En la antigua Grecia se decía que todo poder ha de tener un control y si no lo tiene degenerará en tiranía. Incluso en el mundo desarrollado abundan los casos de instituciones privadas y también algunos estamentos públicos, en los cuales la ausencia de transparencia y de controles propicia la corrupción en cualquiera de sus formas: tráfico de influencias, aceptación de regalos, robo de dinero público, etc. Por encima de los eternos debates filosóficos y antropológicos acerca de la condición humana, no debemos esperar a vivir en un mundo de ángeles perfectos incapaces de llevar a cabo ninguna corrupción, sino en un Estado cuyos sistemas de control y de transparencia impidan cualquier desvío en la conducta de los servidores públicos. Brasil -debido a la falta de transparencia- es uno de los países del mundo con peor índice de retorno de impuestos, es decir, el ciudadano recibe muy pocas prestaciones y servicios sociales respecto a la cantidad de dinero que en forma de diferentes cargas tributarias paga al Estado. La percepción de esta cuestión es nítida por parte de los contribuyentes. Si bien durante los últimos diez años se han mejorado todos los indicadores macroeconómicos, esta mejora no se refleja en aquellos servicios que todo Estado debe prestar de forma obligatoria.

La falta de transparencia y la corrupción derivada de la misma no son sino dos de entre tantos factores que han marcado la relación de los brasileños con sus diferentes gobiernos. Durante los últimos años se han aprobado varias leyes que pretenden luchar contra estos problemas, pero éstas chocan con las costumbres arraigadas en los comportamientos de los políticos en la esfera pública. El ciudadano brasileño se desmotiva al ver de continuo en los medios de comunicación gravísimos casos de corrupción cuyo desenlace final rara vez es el procesamiento de los cargos públicos. Esta conciencia de impunidad da lugar a un pensamiento peligrosísimo que causa un daño incalculable al Estado de derecho, esto es: cuando el ciudadano percibe a los políticos como una casta aparte, identifica a éstos con el propio Estado y tiende a un cierto desarraigo frente a ese Estado al que no reconoce como legítimo. Si los gestores públicos desvalorizan con su mal ejemplo valores como la honestidad, la ética, la transparencia y la justicia, no deberán extrañarse después de que los propios ciudadanos no cumplan con las debidas obligaciones con un sistema con el cual es difícil identificarse. La corrupción socava la legitimidad de instituciones públicas y privadas, afecta económicamente a toda la sociedad y devalúa los más esenciales principios de convivencia y justicia.

Esta falta de transparencia afecta también, por supuesto, al desarrollo económico de cada país y, en ocasiones, lo hace de un modo devastador. Los 30.000 millones que Brasil pierde cada año en corruptelas de todo tipo son el equivalente al 5% de su Producto interior bruto, y muchos economistas piensan que esa cifra es la que se descuenta porcentualmente cada año de las propias estadísticas de crecimiento de Brasil. La antítesis del desolador y corrupto sistema político brasileño lo constituyen los países nórdicos. Según Transparencia Internacional estas naciones tienen los sistemas democráticos menos corruptos del mundo y -al contrario de lo que sucede en Brasil- la percepción de confianza y transparencia del ciudadano es notable.

Casi ningún funcionario de un país nórdico tiene potestad para manejar dinero público por sí mismo y los que sí tienen ese poder han de dar antes explicaciones claras y concisas ante los órganos de control de para qué será utilizado ese dinero. Cabe destacar aquí un hecho, inimaginable tan solo veinte años atrás, y que está íntimamente ligado al uso de las nuevas tecnologías: se ha constatado, precisamente en Brasil, que todo concurso público cuya gestión, presentación de proyectos y adjudicación final de los mismos, realizado íntegramente a través de internet, elimina de facto -al no existir contacto personal alguno- cualquier vestigio de corrupción que tan frecuentemente se da cuando las empresas tratan con los diferentes poderes a través de sus intermediarios. En estos casos las empresas se ciñen a protocolos y procesos estrictamente técnicos, burocráticos y transparentes llevados a cabo por medio de la red. Esta rigidez extrema -exenta de contacto humano- termina siendo un factor positivo y, tal vez, el embrión de las futuras relaciones empresa-Estado, principalmente en aquellos

países donde ha sido tradicionalmente imposible optar a una obra pública sin incurrir en corrupciones y clientelismos que tanto han dañado la relación de los ciudadanos con sus gobiernos.

La transparencia en la gestión del dinero público es un pilar básico del propio Estado de Derecho porque son innumerables las ocasiones en que no existe posibilidad alguna de conciliar los intereses de la ciudadanía y los de las grandes empresas y emporios financieros que tan solo procuran su propio beneficio en detrimento, si fuera necesario y como tantas veces acontece, del interés general. Lo mismo ocurre en el caso de las ONG, muchas de ellas han adquirido un tamaño extraordinario a costa de las subvenciones del Estado, algunas poseen un carácter puramente político un tanto alejado de los objetivos para los cuales fueron fundadas. Un control objetivo y transparente sobre estas organizaciones se convierte en algo esencial puesto que llegan allí donde muchos gobiernos no actúan y cuentan cada vez con un mayor número de afiliados.

No puede existir una relación entre el Estado y sus ciudadanos que no esté basada en la transparencia, puesto que no será nunca una relación fundada en la verdad y en la confianza. Una nación es un conjunto de personas que marchan en un mismo rumbo, la inmensa mayoría de la población mundial está formada por ciudadanos honestos que desean las mismas cosas y comparten iguales objetivos: el bienestar propio y el de sus mayores, una mejor formación y educación para sus hijos, una atención sanitaria de calidad, un sistema de transportes eficiente, etc. Estos ciudadanos demandan, además, en el ámbito público unos gestores en los que creer y confiar y son los políticos quienes han de estar a la altura de una sociedad que exige cada vez más limpieza y honestidad en los asuntos que a todos afectan.

3. EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL FUTURO.

Existen muchas analogías entre Brasil y el resto de países emergentes tales como China, Rusia, India, México o Turquía. Una de las más inquietantes características de estas naciones es la debilidad de su sociedad civil que se traduce en un activismo social prácticamente nulo. En estos lugares, en mayor o menor medida, las formas de gobierno habitual han sido las tiranías, de manera que el asociacionismo, la formación de partidos e instituciones, y todo aquello que potencie, vertebré y fortalezca la sociedad civil ha estado prohibido. La actual crisis económica moviliza a millones de personas en Europa preocupadas por perder derechos sociales y servicios públicos que jamás pueden convertirse -en virtud de una mejor gestión- en áreas particulares de negocios.

El ciudadano europeo medio es consciente de que las luchas sociales y la concienciación colectiva son las que les han llevado a disfrutar del Estado de Bienestar, y para mantener ese sistema -incluso en la actual situación de gravísima crisis económica y de empleo- se manifiestan en contra de los recortes que se están produciendo en múltiples áreas, principalmente en los tres pilares que -aparte de un marco jurídico y social verdaderamente moderno- definen a una sociedad auténticamente justa, igualitaria, culta y libre, esto es, una sanidad universal, gratuita y de calidad; una educación pública que aspire a la excelencia y un sistema de transportes eficiente y moderno. En los países anteriormente citados, la falta de formación y de conciencia social lleva a sus ciudadanos a no aspirar a ninguna de estas premisas, y prefieren mejorar su nivel de vida para que sus hijos accedan a sistemas de educación y sanidad de calidad, aunque deban pagar por ellos. Tampoco consideran especialmente importante el hecho de poseer una buena red de transportes y, en cuanto su estatus personal experimenta un progreso lo aprovechan para adquirir un vehículo propio. No se puede crecer económicamente descuidando derechos sociales y laborales.

El mundo del futuro -como ha ocurrido a lo largo de toda la Historia- bien nos puede mostrar países con sistemas públicos pujantes y eficaces en contraste con otros en los cuales la ausencia de solidaridad forme parte de su día a día. La igualdad económica y social es uno de los factores que más cohesiona una sociedad. La educación limita a las personas más que las leyes, muchos individuos no han sido educados en valores solidarios y han interiorizado y asumido como algo “natural” todas las

prácticas bárbaras, crueles y corruptas de nuestro sistema como si otro mundo no fuera posible ni deseable. No cabe duda, que el crecimiento económico experimentado por estas naciones se ha producido sin un aumento -al menos en la misma proporción- del nivel cultural y de la concienciación de la población de las mismas.

El conocimiento nos convierte en ciudadanos más exigentes con el poder, más libres y, por tanto, menos manipulables. Los propios hombres y mujeres de estos países no suelen exigir derechos plenos porque no se consideran, en definitiva, como depositarios legítimos de los mismos. La falta de cultura y de información aumenta en los ciudadanos la tolerancia hacia la corrupción en todas sus formas: tráfico de influencias, robo de dinero público, alargamiento de procesos judiciales mediante argucias de toda clase, etc. Este cáncer, con otras formas y matices, afecta también a los países desarrollados. La misma sociedad occidental se ha vuelto excesivamente materialista y ha olvidado que tan sólo a través de las Humanidades se pueden crear buenos ciudadanos. El principal problema no es que no conozcamos, sino que no nos preocupe ni queramos conocer y saber. Una educación que excluya el Humanismo en favor de lo técnico producirá individuos desubicados en la medida en que no se puede considerar completa -por brillante que sea en otras áreas- una formación que ignore la Literatura, la Historia, la Arquitectura o la Música.

El ciudadano medio -pese a ser más activo socialmente que aquellos que viven en los países emergentes- no aspira como antaño a comprender realidades complejas y a profundizar en los efectos y las causas de los asuntos que a todos afectan. La toma de conciencia es siempre el primer paso para optar a otras alternativas. Cuando se habla de un problema ese problema comienza a solucionarse, en caso contrario permanece en esa oscura nebulosa entre la ignorancia de los que no saben y el conformismo de los que, conociéndolo, no actúan contra ese mal. Hasta hace tan solo quince años el debate en Europa se centraba en reducir las jornadas laborales, hoy se promulgan leyes que vinculan salarios a productividad, que otorgan “libertad” a los trabajadores a la hora de trabajar más horas, y se reducen sueldos -siempre del pueblo y no de los dirigentes- ante la pasividad de muchos.

4. BREVE ANÁLISIS HISTÓRICO DE LAS IDEOLOGÍAS.

Volviendo a la cuestión de la crisis económica actual, las consecuencias y, por supuesto, las causas que nos han llevado a esta situación demuestran que necesitamos más regulación y, por tanto, más Estado. Es evidente que el comunismo, tal como lo hemos conocido no sólo en su vertiente económica, sino también genocida, no puede ser una alternativa seria al actual sistema, pero ello no legitima, en modo alguno, las teorías del liberalismo que pretenden empequeñecer aún más al Estado y conseguir una mayor desregulación. Lo contrario de un capitalismo desbocado, abusivo, cruel y devastador no es ninguna delirante dictadura, sino la justicia social.

Son innumerables los casos de empresarios que han contribuido con su trabajo a hacer del mundo un lugar más próspero, igualitario y justo, pero también han sido muchos los que -aprovechando determinados resquicios legales- han explotado a otros seres humanos. Necesitamos más orden y más normas que regulen nuestro sistema porque nada nos permite pensar que las malas prácticas vayan a cambiar o desaparecer de un modo espontáneo. Los grandes financieros se han mostrado no sólo insaciables, sino absolutamente crueles e insolidarios. Un ejemplo de ello: cuando los Estados han salido al rescate de las entidades bancarias, les han cobrado un determinado interés que ha sido muy inferior al que las entidades fijan cuando adquieren deuda pública de los países, éstos, a su vez, toman medidas antisociales para obtener más dinero, y lo hacen siempre dañando a las clases medias y bajas, y pocas veces optimizando los recursos con una mejor gestión.

Una de las grandes mentiras esgrimidas por el sistema para adelgazar a los Estados en favor de las empresas es repetirnos de forma permanente que lo privado funciona mejor que lo público, y lo peor es que no hemos sido capaces de cuestionar y refutar estas falsedades. Pondré un ejemplo: los ferrocarriles británicos; antes de ser privatizados su índice de puntualidad era referencia mundial y su

siniestralidad era bajísima. A día de hoy las inversiones en mantenimiento -al aplicarse sólo políticas de rentabilidad- han caído en picado, como consecuencia de ello han aumentado los accidentes y ha disminuido la puntualidad, el estado de algunas estaciones es tan lamentable que -en este sentido- más parece Inglaterra un país del tercer mundo que una de las potencias europeas. Pero no es necesario hablar de datos concretos porque no precisamos de muertos en los ferrocarriles, de enfermos no atendidos a las puertas de los hospitales o de apagones masivos de luz en las grandes ciudades para demostrar la perversión inherente a este sistema. Es suficiente que comprendamos que determinados servicios que forman parte de nuestros derechos como ciudadanos no pueden, bajo ningún concepto, convertirse en un negocio.

La escuela privada selecciona y clasifica a los alumnos más brillantes en detrimento de los que necesitan más ayudas porque esas ayudas requieren más inversión; si privatizamos el sistema de transportes no será difícil imaginar la supresión de líneas de autobús que atraviesen barrios poco concurridos por el simple hecho de que no serán rentables. ¿Qué haremos entonces con las personas mayores de esos barrios, con quienes tengan problemas de movilidad o con aquellos que no tengan vehículo propio? Si se privatiza el sistema sanitario se convertirá en negocio uno de nuestros derechos fundamentales, un hospital podrá rechazarnos tomando como referencia nuestro historial médico al considerarnos “pacientes caros” y antieconómicos. Todos sabemos que nada de esto es utópico ni está en estado embrionario. Cualquier ciudadano mínimamente informado conoce la inmensa fuerza de la industria farmacéutica, capaz de ocultar estudios que demuestran la capacidad dañina de este o aquel medicamento que es altamente rentable, y que lleva a cabo otras monstruosidades sobre las que no puedo extenderme ahora porque excedería el propósito de este artículo.

La descomunal influencia de la industria armamentista de muchos países condiciona las decisiones de sus gobiernos en política exterior que, por supuesto, no están supeditadas a ninguna clase de moral, sino a intereses económicos. Hace cinco años el precio de los alimentos básicos comenzó a subir de forma exagerada; tal vez esto no nos afecte de un modo decisivo como ciudadanos de sociedades opulentas, pero eso ha llevado al hambre y a la muerte a millones de hombres y mujeres en los países más pobres, muchas de las grandes distribuidoras hicieron acopio de cereales con el único objetivo de que su escasez aumentara su precio, es decir, el hambre como negocio. ¿De verdad es necesario poner más ejemplos de un sistema inhumano en el que el dinero es más importante que el hombre? Me gustaría que reflexionáramos sobre el hecho de la cantidad de organismos y estamentos como los grandes bancos, las farmacéuticas, las gigantescas multinacionales y corporaciones sobre los que no ejercemos ninguna clase de control democrático. Tampoco decidimos el precio de la gasolina, la subida o bajada de los tipos de interés, el coste de los alimentos, etc.

Qué más ha de ocurrir para que seamos conscientes de la importancia de tener Estados fuertes capaces de limitar la inmensa fuerza de todos estos poderes. Nos dicen que las medidas de izquierdas y los Estados fuertes sólo nos traerán miseria por generaciones, una mentira más: los países con mayor desarrollo humano son los nórdicos europeos donde en los últimos cien años se han llevado a cabo modelos socialdemócratas. Estos países, además, poseen las formas de gobierno más limpias y transparentes. Por el contrario, lo que el sistema nos ofrece ahora -culpando de la crisis a la izquierda cuando han sido la falta de controles y de regulación, entre otros varios motivos, los causantes de la misma- no es más que un régimen de dureza e incertidumbre para el trabajador y una legión de parados. Tal vez a eso lo llamen prosperidad. Por supuesto que esta desregulación es el paraíso soñado por los más fuertes económicamente: un mundo en el que campen a sus anchas sin los límites que algunos Estados y la cordura de los ciudadanos que se atreven a movilizarse quieren imponerles. A este respecto debo decir que ese viejo tópico -que como todos ellos nos lleva a no pensar y a no replantearnos las cosas- de que el Estado no debe prohibir, es un argumento completamente absurdo: el Estado debe prohibir las relaciones sexuales entre niños y adultos, la construcción en espacios protegidos, el vertido de residuos ilegales en ríos y mares, el maltrato a las mujeres, la discriminación salarial y un sinnúmero de cosas que el hombre hace por codicia, por falta de educación o por cualquier otra razón.

La transparencia en la gestión política va asociada siempre a una mayor eficacia, honestidad y optimización de los inmensos recursos de cada Estado que acaba redundando en mejoras, ventajas y progresos de todas clases que la sociedad aprovecha. Insisto en que el ejemplo más válido de ello son las democracias de los países nórdicos.

5. INSTITUCIONES GLOBALES Y PAPEL DE LAS GRANDES EMPRESAS EN LA ECONOMÍA DEL FUTURO

No podemos ignorar las lecciones de la Historia: los tiránicos y opresores regímenes comunistas aparecen a principios del siglo XX como consecuencia de las penosas condiciones de miseria en que vivían millones de personas en todo el continente. Estas personas jamás habían oído hablar de Marx ni de Engels, pero sabían perfectamente que sus vidas se desarrollaban de un modo especialmente doloroso. Algunos estudios llevados a cabo por los grandes bancos privados como Saxo Bank o Citigroup prevén gobiernos dictatoriales e incluso guerras civiles en algunos lugares del sur de Europa si la situación no mejora y se siguen produciendo recortes en el Estado del bienestar que tanta sangre y esfuerzo costó construir. Está claro que éste es un coste humano inasumible desde cualquier punto de vista, pero, aunque no se dieran estos conflictos, conviene que reflexionemos de un modo serio y sensato por encima de ideologías y dogmas sobre el mundo que queremos para nosotros y nuestros hijos: un mundo de enormes desigualdades como lo fueron Brasil o México durante el siglo XX o países verdaderamente modernos e igualitarios donde la meritocracia -aunque sea imperfecta, como todo lo humano- sea la norma general.

El mundo del futuro exigirá una cierta unidad fiscal mundial que evite la evasión de capitales y los paraísos fiscales. Para ello será imprescindible una integración de los mercados financieros con el fin de lograr una mayor regulación. También deberemos plantearnos la creación de un tribunal penal económico internacional que evite las malas prácticas de todo tipo, en caso contrario nos veremos abocados a un mundo donde los Gobiernos y los ciudadanos tendrán un papel cada vez menor en favor de las grandes empresas que actuarán sin controles que las limiten. Será necesaria, además, una mayor cooperación económica de las grandes multinacionales que, obligatoriamente, habrán de pagar más impuestos a los Estados para costear servicios sociales. Que las grandes empresas paguen mayores tributos me parece una cuestión de obligación moral además de una verdadera necesidad práctica.

Si observamos el tamaño económico de algunos grupos empresariales y financieros, comprenderemos que su valor en Bolsa supera el PIB de muchas naciones, no quiero decir que ésto suponga una anomalía -aunque habría que preguntarse si es razonable, sensato y honesto permitir la concentración de tanto poder en manos de los pocos que dirigen el consejo de administración de esas empresas, principalmente cuando no utilizan criterios morales al dirigitas-, pero la propia potencia de semejantes gigantes les permitiría, además de obligarles moralmente, a llevar a cabo actividades de todo tipo que repercutirían en beneficio de la población mundial: destinar más recursos a investigación, desarrollo e innovación y, por supuesto, a cooperación y progreso allí donde más se necesite.

La propia educación que recibimos nos hace imposible imaginar un mundo donde el capitalismo esté más regulado e incluso tenga un rostro más humano y altruista, pero las actuales circunstancias demuestran que ese control es necesario, práctico y, por encima de todo, justo. No podemos educar a nuestros hijos en conceptos de moralidad, honradez, solidaridad, respeto y hasta amor al prójimo, para introducirles después en un entorno laboral en el cual se produce una competitividad tan feroz, inhumana y deshonesta que les lleve a ver el egoísmo, la codicia y la traición como algo natural y legítimo.

6. TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS.

Pero, incluso por encima de un nuevo marco de obligación tributaria para las grandes empresas, hay un problema aún mayor: el de la transparencia en la gestión de los Estados. Existe una cantidad asombrosa de los recursos de todos los países a nivel mundial que se pierden por una mala administración y por corrupciones institucionalizadas profundamente enraizadas en algunas sociedades. Muchos de los que nos exigen que paguemos más impuestos son políticos implicados en graves casos de corrupción en los cuales participan grandes empresas cuya fiscalización, inspección y control es menor por su connivencia con los poderes públicos.

Es necesario educar a los niños desde la escuela en conceptos de honestidad que incluyan un modelo de honradez fiscal (no defraudar impuestos, no llevar a cabo dobles contabilidades en las empresas, interiorizar la idea de que el dinero pagado o descontado será utilizado en beneficio de todos, etc.), pero estos conceptos sólo pueden ser defendidos por servidores del Estado cuya autoridad moral esté intacta. Esta autoridad tan sólo se consigue a través de una gestión honesta y eficaz. Una gestión transparente será obligatoriamente una gestión más eficiente porque toda administración -pública o privada- mejora cuando percibe que está siendo supervisada y cuando está claro ante quién debe rendir cuentas, dar explicaciones y asumir responsabilidades, ese alguien no puede ser otro que el ciudadano que ya no puede admitir durante más tiempo su divorcio y desconfianza respecto a la clase política.